**BORRADOR DECLARACIÓN COALICIÓN REDLAD[[1]](#footnote-1)**

**ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA**

**2017**

Los derechos de las personas a organizarse, manifestarse y actuar están siendo violados ampliamente en un gran número de países de las Américas. Los hallazgos de Civicus – Redlad, basados en datos del [CIVICUS Monitor](https://monitor.civicus.org), una nueva herramienta en línea para rastrear y comparar las libertades cívicas a escala global, muestran que en más de un tercio de los países de la región el espacio cívico es considerado obstruido o reprimido.

**Más de la mitad de la población de las Américas vive actualmente en países con un espacio cívico obstruido (32,21%) o reprimido (21,28%).** Esto significa que la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos en la región enfrentan graves obstáculos, como amenazas a su seguridad personal, negación del derecho a protestar, vigilancia y censura como resultado directo de su activismo. Estos hallazgos reflejan la realidad de una represión amplia y el fracaso gubernamental para proteger a las organizaciones de la sociedad civil y garantizar un espacio cívico propicio.

Los abusos más comunes son la **interrupción de las protestas a través de un uso excesivo de la fuerza**; la **violencia contra los periodistas** y la **censura de los medios de comunicación**; **detención y criminalización de activistas**; y la **introducción de restricciones legislativas** sobre las libertades fundamentales del espacio cívico. Entre las violaciones más graves del espacio cívico, Civicus Monitor cuenta 18 informes sobre **asesinatos de periodistas**, 14 de **asesinatos de activistas** de la sociedad civil o defensores de derechos humanos, y 12 informes sobre el **asesinato de manifestantes**. Además de tres informes centrados en la tortura o los malos tratos y dos sobre desapariciones forzadas.

Esta investigación también proporciona un indicador de lo que está generando esta crisis del espacio cívico. Encontramos que los estados en las Américas responden con más frecuencia con represión cuando **ciudadanos, periodistas u organizaciones critican o desafían a funcionarios, políticas o instituciones** del Estado. Las personas que **defienden los derechos a la tierra y el medio ambiente contra las industrias extractivas y los proyectos de infraestructura**, que participan en el **activismo de derechos humanos y vigilan y presionan** para satisfacer las **necesidades económicas y sociales básicas** también atraen regularmente la represión de actores estatales y no estatales.

Las **restricciones de espacio cívico son muy desiguales en sus efectos**. En otras palabras, el espacio cívico no está "encogiéndose" igualmente para todas las personas. Algunos grupos, en particular los marginados estructuralmente y los desfavorecidos están siendo particularmente amenazados: sean activistas LGBTI en El Salvador, defensores de derechos territoriales en Brasil, líderes anti-industrias extractivas en Colombia, defensores de los derechos indígenas y ambientales en Honduras, Guatemala y Perú, activistas de los derechos de los migrantes en República Dominicana, sindicalistas en Paraguay, activistas contra el racismo en los Estados Unidos, periodistas críticos en México y el Triángulo Norte de América Central o defensores de derechos sexuales y reproductivos y defensoras de derechos humanos en toda la región. Esto mientras que los miembros de las élites privilegiadas han tendido a enfrentar relativamente pocos obstáculos en el ejercicio de sus derechos, y algunos incluso han visto su propio "espacio cívico" crecer exponencialmente en los últimos años.

Las organizaciones que apoyan este informe alientan a los Gobiernos de las Américas a crear y mantener, en la ley y en la práctica, un entorno propicio para la sociedad civil, de conformidad con los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Por lo tanto recomendamos:

* En el continente deben ser adoptadas mejores prácticas para respetar y proteger el derecho de reunión pacífica, especialmente en lo que respecta al uso necesario y proporcional de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
* Todos los casos de homicidio extrajudicial y fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad durante las protestas deben ser investigados de manera imparcial y los responsables deben ser procesados y, si son hallados culpables, debidamente sancionados de conformidad con la ley.
* Los funcionarios de todos los gobiernos deben condenar públicamente el uso de la fuerza excesiva y brutal por las fuerzas de seguridad en la dispersión de las protestas, y los gobiernos deben poner en marcha medidas para asegurar que sus fuerzas de seguridad se adhieran a los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y ​​las armas de fuego para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 20
* Los manifestantes que en cualquier Estado del continente estén detenidos por el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de reunión pacífica, deben ser puestos en libertad de inmediato e incondicionalmente.
* Los Estados deben proteger proactivamente la libertad de expresión mediante la promulgación de instrumentos legales que garantice la libertad de los medios de comunicación, el acceso a la información y la protección de los periodistas de conformidad con las normas internacionales.
* Asegurar que los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación puedan trabajar libremente y sin temor a represalias por expresar opiniones críticas o cubrir temas que puedan ser considerados como delicados.
* Abstenerse de adoptar una legislación que restrinja los derechos a la libertad de asociación, reunión pacífica, expresión y acceso a la información, incluidas las medidas adoptadas bajo el pretexto de fortalecer la seguridad nacional.
* Adoptar medidas legislativas y políticas proactivas para garantizar que los defensores de los derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas en un entorno seguro. En este sentido, los gobiernos de las Américas deberían considerar la adopción de leyes específicas sobre la protección y promoción de los defensores de los derechos humanos, como la promulgada en Costa de Marfil 21, y asegurar que las medidas de protección actualmente en vigor cuenten con los recursos y la implementación adecuados.
* Las autoridades de toda la región deben, sin faltas, llevar a cabo investigaciones imparciales y efectivas sobre todos los casos de ataques, hostigamiento e intimidación contra defensores de derechos humanos.
* La OEA debe actuar como un canal de comunicación entre la sociedad civil local y los estados en los casos en que los gobiernos están violando las libertades fundamentales de la sociedad civil.

Adicionalmente, las organizaciones miembros de la coalición de Redlad:

* Exigimos al Gobierno de Honduras que cumpla con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los activistas y organizaciones de derechos a la tierra para evitar más casos como los de Berta Cáceres, José Ángel Flores, Silmer Dionisio George y Lesbia Yaneth Urquia.
* Exigir al Gobierno de Nicaragua que respete el pluralismo político y aplique las recomendaciones del Secretario General de la OEA, Luis Almagro. También respetar la libertad de reunión pacífica, aunque las protestas sean contrarias a los intereses del Gobierno, como las asociadas a la construcción del Gran Canal.
* Exigir al Gobierno de Guatemala que respete el derecho de las comunidades locales a consultas previas y la libertad de decidir sobre el uso de sus tierras.
* Exigir al Gobierno de Venezuela que retire el Decreto del Estado de Emergencia en el país, respetando las libertades constitucionales especialmente el derecho a protestar.
* Alentar a la OEA a actuar como un canal de comunicación entre la sociedad civil local y los gobiernos que violan las libertades fundamentales, evitando casos infructuosos como ocurrió en Nicaragua entre el Secretario General de la OEA, el Gobierno y la sociedad civil local a principios de diciembre de 2016.
* Exhortar a los gobiernos del continente a seguir ejemplos como Costa Rica, fortalecer las leyes de acceso a la información pública, tener oficinas de participación ciudadana en instituciones como la Asamblea Nacional y proteger la negociación sobre la represión.
* Exhortar a los gobiernos del continente a que aborden las recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los afrodescendientes en las Américas y otros similares en los que recomienda: i) recolectar datos y Realizar investigaciones sobre el perfil racial en las fuerzas policiales, eliminando la discreción de los agentes que les permitan utilizar estereotipos en sus procesos de detención y detención; ii) trabajar con academias de policía para modificar esta noción de "individuo sospechoso". Este no es el caso sólo para las personas de ascendencia africana; Los LGBTIQ y los jóvenes también sufren esa discriminación. Así mismo a que se cumplan los acuerdos nacionales generados, como el Manifiesto contra la discriminación racial de la Policía Nacional de Colombia adoptado en diciembre del 2016.

**MEJORAS EN EL ESPACIO CÍVICO**

Para concluir este análisis inicial con una nota alta, vale la pena señalar que mientras el espacio cívico está bajo serias presiones en muchos países de la región, la sociedad civil ha luchado para recuperar su espacio y en algunos casos ha logrado obtener mejoras. El Monitor CIVICUS registra mejoras en las condiciones del espacio cívico y ha documentado desarrollos positivos tan variados como la aprobación de las leyes de Acceso a la Información Pública en [Argentina](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/09/28/protests-dispersed-excessive-force-argentina/) y [Paraguay](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/08/09/campesinos-heavy-sentences-curuguaty-massacre/); La Corte Suprema de [Belice](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/09/15/court-decision-belize-victory-lgbt-rights-defender-caleb-orozco/), en nombre de un activista LGBTI acosado y penalizado, aceptó que la criminalización de relaciones homosexuales consensuales entre adultos es inconstitucional, así como la elección de un decimotercer senador para representar a la sociedad civil en el Poder Legislativo de [Belice](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/02/23/13th-senator-elected-registered-ngos-first-time-history/); Una sentencia que deroga un controvertido estatuto que busca restringir las protestas después de las manifestaciones estudiantiles de 2012 en **Canadá**; Las decisiones que promueven las libertades de expresión y acceso a la información pública en [Costa Rica](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/10/28/progressive-court-rulings-improve-freedom-expression-and-access-information-costa-rica/) y la despenalización parcial de los llamados "delitos del habla" en la [República Dominicana](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/07/07/constitutional-court-ruling-partially-decriminalises-defamation/); Una difusión de información en línea que evita prohibiciones en [Cuba](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/05/09/cuban-authorities-violate-civic-freedoms/); La prosecución de policías por un ataque contra un activista LGBTI, así como la condena de miembros de pandillas por el asesinato de un periodista en [El Salvador](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/05/01/lgbti-activists-continue-face-harassment-el-salvador/); La liberación de activistas guatemaltecos y los avances en la investigación del Ministerio Público sobre el asesinato en 2015 de dos periodistas en [Guatemala](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/02/13/land-rights-activists-and-journalists-under-attack-both-state-and-non-state-actors/); Expresiones de apoyo oficial a los derechos de las personas LGBTI que llevan a un impulso en la organización y el activismo LGBTI en [México](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/11/01/another-community-radio-reporter-assassinated-oaxaca/); Una decisión de Facebook para bloquear una empresa [canadiense](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/02/08/thousands-march-toronto-protest-us-muslim-travel-ban/) que vende herramientas de monitoreo de medios sociales a los departamentos de policía para acceder a sus datos; Y la revisión de las directrices para la legislación contra el terrorismo y el blanqueo de dinero por parte del Grupo de Acción Financiera de los [Estados Unidos](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/08/15/many-arrested-during-black-lives-matter-protests/).

**Acceso a la información**

Redlad ha estado trabajando con aliados nacionales en toda la región para establecer un proceso de seguimiento de los compromisos internacionales que los gobiernos adquieren en escenarios interamericanos, como los mandatos de las Cumbres de las Américas. Pero el proceso se ha visto obstaculizado debido a los graves problemas de acceso a la información en el continente.

Mucha información no existe; de la que existe, poca está disponible, y la disponible está desactualizada o es de muy pobre calidad. En muchos países, la información procedente de fuentes oficiales no es fiable porque los datos son manipulados para "quedar bien" en las encuestas, o porque se obtienen sin rigor metodológico o porque sólo se manejan a nivel nacional.

Esta situación representa una deficiencia en las políticas de acceso a la información pública, ya que en muchos países la rendición de cuentas pública no es adecuada o manipulada y los estudios comparativos o evaluaciones de los datos disponibles son desacreditados. Cuando la información está disponible, en muchos casos se presenta de una manera que hace imposible el análisis de las organizaciones de la sociedad civil, que tienen limitaciones de personal, tiempo y experiencia en el análisis de la información.

Por lo tanto,

* Los gobiernos del continente deben fortalecer las leyes sobre el acceso a la información pública y establecer oficinas para la participación ciudadana dentro de diversas instituciones en todas las ramas del gobierno.
* Exhortamos a los gobiernos del continente a que garanticen de forma real la transparencia y acceso a la información pública.
* Recomendamos avanzar en la construcción de espacios de trabajo conjunto entre las organizaciones de la sociedad civil, los actores sociales y los gobiernos para la construcción, implementación y evaluación de políticas de gestión de la información pública y rendición de cuentas pública.

People’s rights to organise, speak out and take action are being extensively violated in a large number of countries in the Americas. Civicus – Redlad findings based on data from the [CIVICUS Monitor](https://monitor.civicus.org), a new online tool to track and compare civic freedoms on a global scale, show that civic space is rated as either obstructed or repressed inmore than a third of the countries in the region.

**More than half the population of the Americas currently lives in countries with either obstructed (32.21%) or repressed (21.28%) civic space**. This means that a majority of civil society organisations and human rights defenders (HRDs) in the region face considerable to serious obstacles, including threats to personal safety, denial of the right to protest, surveillance and censorship, as a direct result of their activism. These findings reflect a reality of extensive repression and government failure to protect civil society organisations and guarantee an enabling civic space.

The most common abuses are the **disruption of protests through excessive force**; **violence against journalists and censorship of the media**; the **detention and criminalisation of activists;** and the introduction of **legislative restrictions on core civic space freedoms**.Among the most serious civic space violations, Civicus Monitor accounts 18 reports on **killings of journalists**, 14 reports of **killings of civil society activists or HRDs**, and 12 reports on the **killing of protestors**. As well as three reports focusing on torture or ill treatment and two involving enforced disappearances.

This research also provides an indication of what is driving this civic space crisis. We find that states in the Americas most often respond with repression when citizens, journalists or organisations **criticise or challenge state officials, policies or institutions**. People **defending land rights and the environment against extractive industries and infrastructure projects**, engaged in **human rights activism and monitoring** and pushing for **basic economic and social needs** to be met also regularly attract repression fromboth state and non-state actors.

Additionally, there are **inequalities of shrinking civic space**. Civic space restrictions are highly uneven in their effects. In other words, civic space is not ‘shrinking’ equally for everybody. Some groups, and particularly structurally marginalised and underprivileged ones - be them LGBTI activists in El Salvador, land rights defenders in Brazil, anti-mining leaders in Colombia, indigenous and environmental rights defenders in Honduras, Guatemala and Peru, migrants’ rights activists in the Dominican Republic, trade unionists in Paraguay, anti-racism activists in the United States, critical journalists in Mexico and Central America’s Northern Triangle, or advocates of sexual and reproductive rights and women human rights defenders (WHRDs) across the region - are being specifically targeted, while members of privileged elites have tended to face comparatively few hindrances in exercising their rights, and some have even seen their own ‘civic space’ grow exponentially over the past years.

The organisations endorsing this report, encourage the Governments of the Americas to create and maintain, in law and in practice, an enabling environment for civil society, in accordance with the rights enshrined in the American Convention on Human Rights and the American Declaration of the Rights and Duties of Man. Therefore:

* Demand the Government of Honduras to fulfil the precautionary measures ordered by the Inter-American Commission on Human Rights to land rights activists and organisations to avoid more cases like the ones of Berta Caceres, Jose Angel Flores, Silmer Dionisio George, and Lesbia Yaneth Urquia.
* Demand the Government of Nicaragua to respect political pluralism and implement the recommendations given by the OAS General Secretary, Luis Almagro. Also to respect freedom of peaceful assembly, even if protests are against the Government’s interests, such as the building of the Great Canal.
* Demand the Government of Guatemala to respect local communities’ right to previous consultations and freedom to decide on the use of their land.
* Demand the Government of Venezuela to withdraw the Decree of the State of Emergency in the country, respecting constitutional freedoms specially the right to protest.
* Encourage the OAS to act as a communication channel between local civil society and Governments that violate fundamental freedoms, and avoid unsuccessful cases as the one happened in Nicaragua between the OAS General Secretary, the Government and local civil society on early December 2016.
* Exhort governments in the continent to follow examples such as Costa Rica, strengthening laws on access to public information, have offices for citizen participation on institutions such as the National Assembly, and protect negotiation over repression.
* Exhort governments in the continent to address the recommendations of the report of the Inter-American Commission on Human Rights on the situation of Afro-descendants in the Americas, and other similar ones, in which it recommends: (i) to collect data and conduct research on racial profiling In the police forces, eliminating the discretion of agents that allow them to use stereotypes in their detention and arrest processes; ii) working with police academies to modify this notion of 'suspect individual'. This is not the case only for people of African descent; LGBTIQ and young people also suffer from such discrimination.

**Civic Space improvements**

To finish on a high note, it is worth noting that while civic space is under serious pressure in many countries across the region, civil society has fought to reclaim its space, and in some cases has succeeded in obtaining improvements. The CIVICUS Monitor tracks such improvements in civic space conditions, and has documented positive developments as varied as the approval of Access to Public Information laws in [Argentina](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/09/28/protests-dispersed-excessive-force-argentina/) and [Paraguay](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/08/09/campesinos-heavy-sentences-curuguaty-massacre/); the Supreme Court of [Belize](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/09/15/court-decision-belize-victory-lgbt-rights-defender-caleb-orozco/) ruling on behalf of a harassed and criminalised LGBTI activist that the criminalisation of consensual same-sexual relations between adults is unconstitutional, as well as the election of a thirteenth senator to represent civil society in the Legislative branch of [Belize](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/02/23/13th-senator-elected-registered-ngos-first-time-history/); a ruling striking down a controversial by-law seeking to restrict protests following the 2012 student demonstrations in [Canada](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/06/28/june-28th-update-canada/); rulings boosting the freedoms of expression and access to public information in [Costa Rica](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/10/28/progressive-court-rulings-improve-freedom-expression-and-access-information-costa-rica/) and partially decriminalising so-called ‘speech crimes’ in the [Dominican Republic](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/07/07/constitutional-court-ruling-partially-decriminalises-defamation/); a spread of online reporting bypassing prohibitions in [Cuba](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/05/09/cuban-authorities-violate-civic-freedoms/); the prosecution of police officers for an attack against an LGBTI activist, as well as the conviction of gang members for a journalist’s assassination in [El Salvador](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/05/01/lgbti-activists-continue-face-harassment-el-salvador/); the release of Guatemalan activists and the progress made in the Public Ministry’s probe of the 2015 murder of two journalists in [Guatemala](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/02/13/land-rights-activists-and-journalists-under-attack-both-state-and-non-state-actors/); expressions of official support for LGBTI rights leading to a boost in LGBTI organisation and activism in [Mexico](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/11/01/another-community-radio-reporter-assassinated-oaxaca/); a Facebook decision to block a [Canadian](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/02/08/thousands-march-toronto-protest-us-muslim-travel-ban/) company selling social media-monitoring tools to police departments from accessing its data; and the revision of guidelines for anti-terror and anti-money laundering legislation by the [United States](https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/08/15/many-arrested-during-black-lives-matter-protests/)’ Financial Action Task Force.

**ACCESS TO INFORMATION**

Redlad has been working with national allies in all the region to establish a process of follow up to the international commitments that the governments acquire in inter American scenarios, such as the Summit of the Americas’ mandates. But the process has been very difficult due to grave problems of access to information in most of the countries.

When available, poor quality of information available. Many data simply do not exist, and when they exist they are outdated or unpublished. In many countries, information from official sources is not reliable because the data are manipulated to "look good" in surveys, or because they rise without methodological rigor or because they are only managed at the national level.

This situation represents a deficiency in the policies of access to public information, because in many countries, public accountability is not adequately rendered or manipulated, and comparative studies or assessments of available data are discredited.

 When information is available, in many cases it is presented in a very way that makes impossible for analysis by civil society organizations, which have limitations of personnel, time and expertise in the analysis of information.

Therefore, we recommend:

* Exhort governments in the continent for the real guarantee of transparency and access to public information.
* To formalize joint work spaces between civil society organizations, social actors and governments for the construction, implementation and evaluation of public information management policies and public accountability.

1. Extract from an extensive report build by Civicus and other organizations that participate in the Civicus Monitor, in which Redlad is one of the research partners. [↑](#footnote-ref-1)